

En esta edición

Los últimos meses han sido un período interesante en materia de disputas en la Organización Mundial de Comercio (OMC): Las acciones de Estados Unidos contra Argentina y Brasil sobre propiedad intelectual, los nuevos problemas en torno al caso atún-delfín, la decisión favorable a la prohibición de Francia sobre el asbesto canadiense y la acción de la Unión Europea contra Chile por el pez espada, son algunos de los casos en movimiento. En este número le daremos especial importancia al caso del pez espada por sus potenciales implicaciones para el debate comercio-desarrollo sostenible. Ver páginas 1, 2 y 4.

Sin despertar aún mayores expectativas, y con los países replegados en sus posiciones pre-Seattle, las discusiones en la OMC sobre agricultura, aplicación de acuerdos, propiedad intelectual y servicios, entre otras, comienzan a avanzar. Adicionalmente, el conjunto de países que respaldan el lanzamiento de una nueva ronda (que sigue pareciendo lejana) va en aumento. Ver páginas 5, 6 y 7.

Este ha sido además un período interesante para la integración regional: la gira del nuevo presidente de México por la región, el relanzamiento del Mercosur, las expresiones de interés del nuevo gobierno de Chile por sumarse al bloque, el avance en las negociaciones entre la Comunidad Andina y Mercosur y la Cumbre de Brasilia. El momento parecería propicio para que la región comience a avanzar en una política seria de comercio y desarrollo sostenible. Ver páginas 11 y 12.

Biocomercio: una apuesta por el desarrollo sostenible	3
Ballenas enfrentan a EE.UU. y Japón	10
Conflicto entre interés público y privado en el TLCAN	12
Toma fuerza el debate entre propiedad intelectual y derechos humanos	13
Cambios en la estructura del ICTSD	15
Calendario de eventos y publicaciones	16

El pez espada enfrenta a Chile y la UE

La controversia en torno a la decisión chilena de 1991 de no permitir el acceso de los buques pesqueros españoles a sus puertos para reexportar pez espada aparece como el primer escenario en el que entran en conflicto la jurisdicción de uno de los foros internacionales más importantes relacionados con el medio ambiente y la OMC, y el primer caso en el que se plantea una discordia entre las normas de la OMC y normas ambientales adoptadas multilateralmente.

En agosto, mientras fracasaban las consultas entre la UE y Chile en la OMC y la primera hacía saber que llevaría al país suramericano a un Panel en septiembre, la misma UE aceptaba el establecimiento del Tribunal de Arbitraje en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) solicitado por Chile respecto al mismo tema.

Los recursos marinos siguen dando muestras de ser uno de los sectores en los que la relación entre el comercio internacional y la sustentabilidad se manifiestan mas claramente. En el pasado número de *Puentes*, dos artículos daban cuenta de la sobreexplotación de la merluza y el pepino de mar como consecuencia de la presión de flotas subsidiadas, en particular europeas, y la demanda de los mercados internacionales. Hace poco el debate sobre subsidios pesqueros recibió un nuevo impulso en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC (CCMA).

A comienzos de la década de los 90, la Comisión Internacional para la Convención del Atún Atlántico, de la que la UE es parte, recomendó limitar las capturas de pez espada en el Océano Atlántico. Esta decisión impulsó a los pescadores españoles a trasladar sus actividades al Pacífico Sudeste, en aguas de alta mar adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE, 200 millas) de Chile. La entonces Comunidad Europea subsidió este nuevo emprendimiento¹.

Chile considera el pez espada como en plena explotación en su ZEE. Dado que esta es una especie altamente migratoria, Chile sostiene que la captura que realiza la flota española es en efecto una captura del mismo *stock* explotado dentro de la ZEE, lo cual pone a la especie (y su explotación en la ZEE) en peligro. Cabe anotar que casi todos los permisos de pesca de pez espada en la ZEE han sido adjudicados a pescadores artesanales.

En 1991 Chile decidió entonces adoptar medidas. Amparándose en la Convemar, que le permite proteger el recurso en la ZEE y la alta mar adyacente (ver legislación interna, Ley General de Pesca y Acuicultura y decretos específicos para el pez espada) y en el art. XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Chile decide la prohibición del uso de sus puertos para el desembarco y la reexportación de pez espada capturado por las flotas que operan en la alta mar adyacente a la ZEE. Esto implica una pérdida de competitividad para las exportaciones de la UE al mercado norteamericano además de bloquear las exportaciones a Chile.

Desde entonces se han entablado una serie de negociaciones infructuosas entre ambas partes para encontrar un acuerdo de cooperación, que incluyó la

¹ Decisión C (90) 2184 del 24/10/1990 sobre asistencia financiera a campaña experimental en el Pacífico Sudeste, basada en la Regulación (CE) 4028/86, citada en el informe al Comité de Regulación de Barreras Técnicas de marzo 1999, Director General 1.

Continuación de la página 1

creación de una Comisión Técnica de Pesca Chile-UE de escasa actuación.

En vista de la falta de resultados, Chile impulsó la negociación de un acuerdo subregional de pesca en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y llevó el caso a los mecanismos de solución de diferencias de la Convemar. La UE, por su parte, determinó que "la prohibición de desembarco de pez espada en puertos chilenos violaba las obligaciones establecidas en el artículo V (sobre libertad de tránsito) del GATT", con lo que allanó el camino para presentar un reclamo ante el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (MSD), solicitando consultas con Chile (primer paso en el procedimiento).

Las consultas en el MSD fracasaron debido, por un lado, a la exigencia europea de que Chile flexibilizara la medida mientras se negocia un acuerdo de cooperación pesquera y se reactiva la Comisión Técnica, y, por el otro, a la decisión chilena de mantener la cuestión como un caso de conservación de recursos naturales y no como un asunto comercial y su rechazo a las condiciones de flexibilidad propuestas por la UE. Se espera que la UE formalice la solicitud de un Panel sobre el tema en la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD).

La Argentina, que tiene que lidiar con un problema similar de sobrepesca en el caso de la merluza, estaría dispuesta a apoyar el reclamo chileno. Cabe recordar que Argentina tiene un acuerdo pesquero con la UE que ha sido culpada en parte por el colapso de la merluza (ver *Puentes* Vol. 2 No.5). Noruega, por su parte, ha manifestado su intención de formar parte del proceso tanto en la OMC como en la Convemar.

Aspectos jurídicos y políticos para observar

La diferencia de enfoques entre Chile y la UE han ocasionado un conflicto de competencias. Chile considera que se trata de una cuestión de conservación y por lo tanto es competencia de la Convemar, en tanto que la UE sostiene que se trata de una cuestión comercial y en consecuencia, es asunto de la OMC. El caso tiene particular importancia por las múltiples implicaciones que podría tener. Por ello, más allá de la solución a la que se llegue, la cual seguramente será pragmática, es importante observar en este proceso la evolución de ciertos principios que pueden ir configurando la relación futura de la OMC con los AMUMA. Por ejemplo:

- La cuestión de la jurisdicción sobre el caso. Tanto el GATT como la Convemar contienen normas aplicables a la situación, ambos acuerdos han sido invocados y sendos procesos de solución de diferencias están en marcha. Mientras que la Convemar prevé que las partes cuestionen la competencia de los tribunales que se convoquen, en la OMC la competencia de un Panel se decide en la reunión del OSD que, frente a una solicitud, decide establecerlo a menos de que haya consenso entre sus miembros de no hacerlo².

Si ninguno de los foros declina su competencia, ¿cuál prevalecerá? ¿Pueden ambos pronunciarse sobre la misma cuestión? ¿Pueden los aspectos comerciales y ambientales dividirse en este caso y tener soluciones independientes? Parece haber aquí un vacío legal importante para la determinación cierta de competencias, vacío que por otra parte ha sido reiteradamente señalado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y que es objeto de debates inconcluyentes en el CCMA.

- El procedimiento establecido en la OMC tiene plazos bastante precisos para todo el proceso, y en consecuencia tiende a ser relativamente ágil. El procedimiento en la Convemar tiene plazos para el establecimiento de los tribunales, pero no para el resto del proceso, con lo que su ritmo podría ser más lento. Así, podríamos encontrarnos frente a una situación en la que la cuestión sea resuelta por un procedimiento primero y luego por el otro. ¿Qué ocurriría entonces?

- La cuestión de las excepciones del Art. XX del GATT. Al igual que en los casos del atún y de los camarones, el Art. XX estará en el centro de la cuestión cuando el Panel lo examine, pero en este caso las medidas ambientales parecen tener sustento en un acuerdo multilateral, y no en decisiones unilaterales.

El Acuerdo de Galápagos

En una movida que ayudaría a cerrar ciertos vacíos y ambigüedades que rodean la decisión chilena, los países ribereños del Pacífico Sudeste - Chile, Perú, Ecuador y Colombia - suscribieron el pasado 14 de agosto un acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en alta mar, o Acuerdo de Galápagos. El acuerdo tiene como objetivo lidiar precisamente con el tipo de situación planteada con el pez espada: la explotación sin control en alta mar de especies que entran y salen de las ZEE.

Este acuerdo subregional, que aún no ha sido ratificado por los parlamentos y en consecuencia no está en vigor, se inscribe en la Convemar y acoge las recomendaciones de FAO sobre conservación de estos recursos. De entrar en vigor, este acuerdo daría una nueva legitimidad a la medida de Chile, ya que en el mismo se reafirman los derechos de los Estados ribereños de proteger recursos vivos más allá de sus ZEE.

Particularmente relevante para este caso es la potestad que explícitamente se concede a los Estados ribereños de prohibir desembarcos y transbordos cuando haya motivos para creer que las capturas se hicieron en violación de las normas y medidas de conservación del Estado, o cuando las capturas menoscaban la eficacia de las medidas vigentes en su jurisdicción.

Por otra parte, el acuerdo también prescribe acciones concertadas para el manejo de recursos y dificulta la evasión de las medidas de control de un país acudiendo a la jurisdicción de otro país ri-

² Más aún, si el OSD rechaza un panel, el solicitante puede reiterar el pedido, en cuyo caso no se puede rechazar.

Continúa en la página 4

Biocomercio: una apuesta por el desarrollo sostenible

Por Aurelio Ramos

La Comunidad Nanuya de Peña Roja, en el corazón de la Selva Amazónica de Colombia, ha venido trabajando por iniciativa propia y con el acompañamiento de la Fundación Terra Preta, en el posible aprovechamiento comercial de varias especies aromáticas y medicinales. Ya se tienen los prototipos de los productos finales para la venta y las cantidades que se podrían producir, pero se desconocen aspectos fundamentales para el éxito del negocio como son los análisis financieros, el capital semilla necesario, las estrategias de mercadeo y el estado de la competencia, entre otros aspectos. La comunidad y Fundación Terra Preta contactaron entonces a Biocomercio con el fin de usar sus mecanismos de "facilitación".

Un funcionario de Pizano S.A., una de las empresas madereras más grandes de Colombia, contacta a Biocomercio con el objetivo de obtener mayor información sobre el proceso de certificación forestal voluntaria. Biocomercio los pone en contacto con el Grupo de Trabajo en Certificación Forestal Voluntaria del Forest Stewardship Council (FSC) en Colombia, les da un listado de certificadoras y les suministra información estratégica sobre mercados de productos certificados.

En ambos casos, Biocomercio trabaja como ente facilitador de información comercial, técnica y de mercadeo, acompaña a los empresarios en sus procesos, les ayuda a establecer criterios de sostenibilidad ambiental y social y realiza investigación estratégica para el desarrollo del sector. Biocomercio es

un programa del Instituto Alexander von Humboldt de Colombia que tiene como objetivo poner en práctica mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios provenientes de la biodiversidad.

Oportunidad comercial de la biodiversidad

El mercado de productos y servicios provenientes de la biodiversidad suma más de US\$900 billones a nivel mundial y sigue en aumento. La riqueza de Colombia en esta materia la ubica en un lugar privilegiado para lograr una adecuada utilización de estos recursos. A manera de ejemplo, actualmente estos productos representan entre el 30 y 40% de las exportaciones del país y son un rubro muy importante en el PIB nacional (*ver tabla 1*).

Cada vez más consumidores optan por productos provenientes de prácticas respetuosas del medio ambiente que involucren criterios de equidad social. Según un estudio realizado por el Centro Internacional de Comercio (1999), se estima que el mercado minorista de venta de productos orgánicos en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en 1998 fue de US\$13 billones y se espera que en cinco años aumente hasta superar los 60 billones. Colombia ya exporta alrededor de US\$8 millones anuales en productos de agricultura orgánica y las tasas de crecimiento del sector son bastante prometedoras.

Las empresas que incorporen estos criterios de forma temprana a su producción estarán asegurando ventajas competitivas porque podrán desde ahora empezar a transferir estos costos de inversión en el tiempo, encontrarán preferencia en los nichos de mercado, se diferenciarán de la competencia, podrán aprovechar los mecanismos de promoción de los gobiernos, y por ahora, los consumidores estarán dispuestos a pagar un sobreprecio por estos productos.

Si bien el uso para la subsistencia y la producción de estos productos para los mercados locales va creciendo, las oportunidades generadas en los mercados nacionales, regionales e internacionales, son cada vez más importantes. La producción en pequeña escala, la calidad, la falta de capacidades empresariales y de gestión, la carencia de información de mercados y el alto costo requerido para validar o certificar la sostenibilidad en la producción, son las principales dificultades para consolidar mercados internacionales.

Continúa en la página 4

Tabla 1

Exportaciones de Recursos Biológicos de Colombia a Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.			
Sector	Valor US 97	Valor US 98	Valor US 99
Artesanías	440.999	668.547	1.001.822
Flores y plantas vivas	460.978.730	468.296.585	475.734.280
Café	2.048.734.23	1.718.710.930	1.185.501.682
Agrícola	495.244.739	478.946.528	565.137.462
Acuícola y pesquero	103.166.127	82.680.322	86.144.725
Empaques	5.866.383	8.623.119	8.236.810
Maderas y muebles	28.759.690	33.915.480	39.377.563
Materiales construcción	914.265	1.554.319	1.438.127
Pieles de babilla	2.232.450	3.681.395	6.706.007
Agroindustrial	477.875.658	606.109.818	422.080.531
Bio-químicos	84.981.064	211.145.846	344.230.538
Farmacéuticos	950.522	1.100.975	1.307.273
Caucho	285.387	198.112	324.913
TOTAL	3.710.430.247	3.615.633.976	3.137.181.733

*/No necesariamente con criterios de sostenibilidad ambiental y social.
Fuente: Cálculos de BIOCOTRAC del INSTITUTO VON HUMBOLDT con datos de Proexport-Colombia.

Continuación de la página 3

Por otra parte, Biocomercio complementa los esfuerzos de desarrollo local y regional de las políticas nacionales en: desarrollo rural sostenible, apoyo al proceso de paz, fortalecimiento a las comunidades de base, nexos interinstitucionales, conservación de los recursos biológicos y diversificación de las exportaciones.

Puesta en marcha del programa

El año pasado, el Instituto Alexander von Humboldt, en asocio con *Biotrade* de la UNCTAD, y con la participación de más de 150 instituciones de los diferentes sectores de la sociedad civil colombiana e internacional (ONGs, sector privado, sector público y comunidades étnicas y tradicionales), realizaron reuniones, estudios técnicos y talleres con el fin de discutir los intereses y objetivos que podría tener una Iniciativa de este tipo para el país. De allí salió el diseño de Biocomercio del Instituto Alexander von Humboldt de Colombia.

Biocomercio está compuesto por cinco módulos y un sistema de trabajo en redes. Los módulos abarcan cinco grandes temas: un sistema de información en Biocomercio (<http://www.humboldt.org.co/biocomercio>; www.humboldt.org.co/biocomercio), la facilitación en desarrollo empresarial para incorporar criterios ambientales y sociales, la investigación de mercados para productos y servicios provenientes de la biodiversidad, la ejecución de proyectos demostrativos del uso sostenible de la biodiversidad y el acceso a fuentes de financiación e inversión.

Por último, el sistema de trabajo en redes apoya las tareas de las diferentes redes según tipo de productos, en las cuales Biocomercio participa activamente: es el caso de las redes de productos naturales no maderables, red de productos orgánicos y el grupo de trabajo en certificación forestal voluntaria.

Aurelio Ramos es coordinador del Programa de Biocomercio Sostenible del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt de Colombia.

COMENTARIO - pez espada / Continuación de la página 2

bereño. En este caso se buscaría impedir que la restricción del acceso a puertos chilenos derive en el desembarco en otros puertos.

Adicionalmente, el acuerdo aborda dos temas que aparecen con frecuencia en el debate sobre comercio y desarrollo sostenible. Por un lado, acoge el principio precautorio, al disponer que aún cuando las medidas deben tomarse sobre una base científica y técnica, la ausencia o falta de esta información no puede impedir que estas se adopten cuando haya riesgo inminente. Por el otro, resguarda los estándares ambientales de los países cuando estos son más altos que los internacionales, estableciendo que las medidas que se adopten para implementar el acuerdo no deben ser menos estrictas que las establecidas bajo jurisdicción nacional.

El Acuerdo de Galápagos permitirá zonificar en cierta forma la alta mar y establecer niveles de captura y de esfuerzo pesquero, temporadas de pesca y artes permitidas. También busca la armonización de las normativas aplicables a las ZEE de cada país.

Un caso que marca precedentes

Además de las cuestiones de corte más jurídico, el caso puede tener implicaciones políticas. Es, por ejemplo, una prueba para la UE, que ha sido muy vocal en la necesidad de vincular en la OMC los temas ambientales y comerciales. El planteamiento de la UE apunta a una solución de subordinación de los AMUMA a las normas comerciales, ya que extrae del ámbito de la Convemar una cuestión que vincula comercio y medio ambiente para colocarla en la OMC, privilegiando así el enfoque comercial. Esto se contradice con las expresiones de la UE en los últimos cinco años, en las que se manifestó favorable a que en caso de conflicto de jurisdicciones se optara por la de los AMUMA para evitar el debilitamiento de éstos. La ambigüedad de la UE puede llevar a un sinceramiento del debate y a una clarificación de las relaciones entre los AMUMA y la OMC.

Lo anterior demuestra que en este caso la UE ha optado por el foro que le da mayores garantías a sus intereses comerciales, como: la posibilidad de imponer sanciones, la obligación de permitir el acceso a puertos y la consecución de mayor celeridad en el procedimiento. En suma, las probabilidades de éxito para la UE son mayores en la OMC, y por ello ha elegido ese foro.

La legitimidad del Comité de Comercio y Medio Ambiente también está en juego. El Comité ha discutido esta cuestión y ha concluido que "si surgiera una disputa entre Miembros de la OMC que son parte de un AMUMA, sobre el uso de medidas comerciales que aplican entre sí en cumplimiento de este, deberían considerar el resolverlo a través del mecanismo de solución de diferencias disponible en el AMUMA". Si bien las conclusiones del CCMA no son vinculantes, la acción de la UE en este caso cuestiona la utilidad de las discusiones en este foro.

El caso también es una prueba para Chile, ya que en general los países latinoamericanos son favorables a dar primacía a las normas comerciales sobre las ambientales y puede indicar cuán dispuestos están todos los Estados miembros de la OMC a acordar competencia sobre temas ambientales a los tratados ambientales, aún cuando entren en conflicto con los tratados comerciales.

Por otra parte, son varios los países latinoamericanos con problemas en sus recursos marinos. ¿Que impactos tendría una decisión de la OMC sobre los esfuerzos que estos países estarían dispuestos a hacer para proteger sus recursos? Mas aún, ¿qué impactos tendría sobre la eficacia de los AMUMA que contienen medidas comerciales en las que se juegan intereses económicos más grandes? En efecto, más de una veintena de tratados ambientales internacionales contienen medidas comerciales, algunas de las cuales afectan intereses de primer orden.

La sobrepesca es un problema global y el pez espada constituye, ciertamente, un caso paradójico que será una oportunidad muy interesante para dar a la discusión comercio-desarrollo sostenible el impulso que necesita.

OMC calienta motores

Luego del trauma de Seattle, la agenda de la OMC comienza a tomar dinamismo con las discusiones sobre agricultura, ser-vicios, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y aplicación de acuer-dos. Los avances no son grandes, los países se han replegado, en general, a sus posiciones pre-Seattle y se vuelve a escu-char con insistencia en Ginebra (sede de la OMC) que el logro de resultados concretos estará supeditado al lanzamiento de una nueva ronda, idea que ha vuelto a recibir el apoyo de un buen número de países (como los agrupados en el G-8, la APEC, la UE y el Grupo de Río). En este artículo pasamos revista a los últimos avances en agricultura, aplicación de acuerdos existentes y propiedad intelectual. Las discusiones sobre comercio y medio ambiente se reportan en la pág. 7.

Agricultura

Las presentaciones oficiales en la primera reunión importan-te de discusiones sobre agricultura (realizada del 29-30 de ju-nio en Ginebra) revelaron que en los siete meses transcurri-dos desde Seattle no se ha logrado acercar posiciones. La UE y EE.UU mantienen diferencias importantes sobre los subsi-dios a la exportación y la 'caja azul', en tanto que los países en desarrollo demandan más flexibilidad hacia políticas agrí-colas orientadas al desarrollo, y el Grupo Cairns¹ amenaza con iniciar disputas contra los programas de subsidios agrí-colas cuando la 'cláusula de paz' (art. 13 del Acuerdo sobre Agricultura) expire en el 2003, a no ser que antes se registren progresos significativos.

Pese a que las discusiones no arrojaron gran-des progresos, el tono y el ambiente fueron favorables, y según algunos funcionarios, ninguna de las partes persigue objetivos irreales.

Trato especial y diferenciado y la 'caja de desarrollo'. "Disposiciones de trato especial y diferenciado que sean reales, robustas y operativas son aún más críticas en agricultura, en primer lu-gar porque la seguridad alimentaria está íntegramente rela-cionada a temas de seguridad más amplios y en segundo tér-mino, por el lugar especial que ocupa la agricultura en la ma-yoría de las economías de los países en desarrollo". Este es el pilar fundamental de la propuesta presentada por 11 países en desarrollo a la sesión de junio (G/AG/NG/W/13).

En la propuesta, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Kenya, Paquistán, Sri Lanka, Uganda y Zimbabwe, argumentan que ciertos "productos cla-ves, especialmente los alimentos básicos, deben estar exentos de la liberalización, y la capacidad de producción interna de los países en desarrollo debe ser incentivada y apoyada para ser más competitiva, en lugar de ser destruida sobre la base de la no-competitividad". Estos países puntualizaron que "las reglas del Acuerdo sobre Agricultura existentes parecen con-ceder trato especial y diferenciado a los países desarrollados en lugar de los países en desarrollo".

Los avances logrados en Seattle respecto a los subsidios a la exporta-ción ya no están sobre la mesa y el debate retornó al punto de partida pre-Seattle.

Citando estudios de casos de la FAO que indican que, al mo-mento, lejos de beneficiarse de la liberalización agrícola mu-chos países en desarrollo enfrentan situaciones socioeconó-micas en deterioro, los once países solicitan, como parte de las negociaciones, una revisión sistemática de la aplicación , que busque rebalancear las reglas e implementar medidas y reformas para abordar los problemas y los vacíos existentes.

El documento sugiere la creación de una 'caja de desarrollo' que estaría exenta de las disciplinas y políticas de la OMC, y se orientaría a:

- Aumentar la seguridad alimentaria y la ca-pacidad de producción;
- Sostener el empleo en los sectores rurales pobres;
- Regular las importaciones baratas, y
- Frenar el 'dumping' de importaciones bara-tas y subsidiadas a los países en desarrollo'.

Por su parte, EE.UU sugiere crear 'criterios adicionales' para eximir ciertas medidas de apoyo consideradas esenciales para los obje-tivos de desarrollo y para la seguridad alimentaria de los paí-ses en desarrollo. Estos criterios facilitarían además la evo-lución de programas diseñados para aumentar la inversión y mejorar la infraestructura, aumentar los sistemas internos de mercadeo, asistir a los agricultores en el manejo del riesgo, proveer acceso a nuevas tecnologías que promuevan la sus-tentabilidad y la conservación de recursos y mejorar la pro-ductividad de los productores de subsistencia. También pro-pone una asistencia técnica 'intensificada', y que "todos los miembros de la OMC consideren los productos de interés para los países en desarrollo, en particular los menos adelan-tados, al hacer reducciones tarifarias".

Subsidios de caja verde y azul. Otra presentación del mismo grupo de países en desarrollo (G/AG/NG/W/14) se concentra en los subsidios de 'caja verde' no accionables, que no están sujetos a techos ni reducciones. El documento argumenta que la caja verde (apoyos internos no distorsivos del comercio y la producción) ha contribuido a aumentar el nivel global de apoyo en los países de la Organización de Cooperación y De-sarrollo Económicos (OCDE), y que satisface las preocupa-ciones no comerciales de los países desarrollados, pero no las de los países en desarrollo.

¹ Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.

La propuesta de los once países en desarrollo es unificar todas las categorías de apoyo interno en una caja de 'subsidios generales' con nuevos criterios de calificación y una cláusula de trato especial y diferenciado y 'debida moderación' que protegería las políticas de los países en desarrollo contenidas en las cajas de subsidios generales y al desarrollo.

Estados Unidos también sugiere simplificar y agrupar las medidas de apoyo interno en dos categorías: medidas que no distorsionan el comercio ni la producción o tienen efectos distorsivos mínimos, las cuales estarían exentas de reducción y, todas las demás medidas de apoyo, que no estarían exentas y serían objeto de compromisos de reducciones. Esta propuesta eliminaría los subsidios de 'caja azul' orientados a limitar la producción.

En contraste, la Unión Europea, en su propuesta sobre medidas de apoyo interno a la agricultura, concluye que "considerando la significativa reducción del impacto comercial que resultó de este nuevo tipo de política de apoyo y su éxito en satisfacer las preocupaciones internas frente al proceso de reforma agrícola, la CE desea resaltar que el concepto de caja azul, como el de caja verde, debe mantenerse" (G/AG/NG/W/17).

Subsidios a la exportación. El tema más controvertido en la ya compleja liberalización agrícola es el apoyo a la exportación. "Los subsidios a la exportación son las políticas agrícolas más distorsivas del comercio y dañan tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados", así comienza la propuesta de negociación presentada por el Grupo Cairns. En Seattle se llegó a un compromiso, tortuosamente redactado, que intentaba superar la oposición entre EE.UU. y el Grupo Cairns por un lado, que quieren la eliminación de los subsidios a la exportación; y la UE por el otro, que insiste que las discusiones se refieran a 'reducciones sustanciales' en todas las formas de apoyo a las exportaciones, incluyendo las garantías a los créditos de exportación. Los avances logrados en Seattle ya no están sobre la mesa y el debate retornó al punto de partida pre-Seattle.

No obstante, el Grupo Cairns (G/AG/NG/W/11) propone que los compromisos relativos a los subsidios a las exportaciones incluyan 'disposiciones concretas de trato especial y diferenciado' que tomen en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y les permitan amortiguar el impacto del proceso de reformas y adaptarse al cambio. El Grupo Cairns propone dos tipos de medidas: plazos de aplicación extendidos, y la ampliación de las exenciones del Acuerdo sobre Agricultura hasta completar la eliminación de los subsidios a la exportación.

Protección de los animales y biotecnología. Se conocieron dos nuevas propuestas que seguramente generarán reacciones airadas. Una está contenida en un documento de la UE sobre protección de los animales y comercio agrícola (G/AG/NG/W/19), en el que se rechazan las acusaciones de

proteccionismo encubierto que ha recibido por plantear el tema. La UE propone elaborar un acuerdo multilateral sobre la protección de los animales pero advierte que su efectividad depende de que haya más claridad legal sobre la relación entre las normas de la OMC y las medidas comerciales tomadas con base en acuerdos multilaterales sobre la protección de animales.

Otra forma de abordar el tema podría ser el etiquetado 'apropiado' para designar bienes producidos en cumplimiento de ciertos estándares de protección a los animales o – y esta es una aproximación novedosa –, algún tipo de compensación autorizada por la OMC para ayudar a cubrir los costos adicionales cuando sean consecuencia directa de los mayores estándares en cuestión.

El otro punto controvertido es la propuesta de EE.UU. de hacer 'transparentes, predecibles y oportunas' las normas sobre los procesos relacionados con el comercio de productos desarrollados a través de 'nuevas tecnologías' en referencia a los productos de la biotecnología. La UE se ha opuesto en el pasado a tratar los procesos de aprobación de la biotecnología en la OMC.

Cuestiones no comerciales. Como una pequeña concesión al argumento de la UE sobre la 'multifuncionalidad', el documento de EE.UU. señala el compromiso y apoyo de este país a las políticas que aborden las preocupaciones no comerciales, incluyendo la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos, el desarrollo rural y la protección del medio ambiente. Sin embargo, el documento sostiene que estos objetivos se logran mejor a través de medios no distorsivos del comercio, que no pasen el costo a otros países cerrando mercados o introduciendo una competencia desleal. Señala además, que si bien las medidas comerciales pueden utilizarse para abordar preocupaciones legítimas sobre salud y seguridad, se opondrá a abrir el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a negociación.

En cuanto a las preocupaciones no comerciales de los países en desarrollo, EE.UU. reconoce las circunstancias y desafíos especiales que enfrentan estos países y señala que presentará propuestas para integrarlos mejor en el sistema mundial de comercio.

Aplicación de Acuerdos

El 22 de junio, los representantes de los países miembros de la OMC se reunieron para preparar la primera sesión especial del Consejo General que abordará cuestiones pendientes sobre aplicación, en particular aquellas planteadas durante la preparación de la Conferencia Ministerial de Seattle. De acuerdo con el programa de trabajo adoptado, la revisión se concentrará en los párrafos 21 y 22 del borrador del Texto Ministerial del 19 de octubre de 1999. Estos dos párrafos cubren básicamente todos los puntos planteados por los países en desarrollo incluyendo, entre otros, antidumping, subsidios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas y los acuerdos sobre propiedad intelectual e inversiones.

Continuación de la página 6

El propósito de este ejercicio es evaluar las dificultades existentes, identificar la manera de resolverlas y decidir acciones apropiadas.

Además de adoptar un programa de trabajo de tres sesiones, el Consejo General comenzó a considerar la preocupación de los países en desarrollo sobre la aplicación del Acuerdo sobre Textiles y Vestido, uno de los temas más controvertidos durante la etapa preparatoria. En esencia, los países en desarrollo buscan un mejor acceso a los mercados de los países industrializados para productos textiles comercialmente significativos. Hasta ahora, EE.UU. en particular ha manifestado que no hará más concesiones en la aplicación de este Acuerdo.

En la sesión del 3 de julio continuaron las presentaciones, especialmente de países en desarrollo, sobre cuestiones de aplicación. La escasa reacción de los países de la OCDE indica que las posibilidades de que se logren avances en estos temas son pocas. La CE y otros países desarrollados han señalado que si bien pueden esperarse avances en temas poco controvertidos, como la asistencia técnica a países en desarrollo, los reclamos más importantes, particularmente aquellos que requieran cambios en los acuerdos existentes, deberán reservarse para una nueva ronda de negociaciones. Varios países en desarrollo, en particular India y Pakistán, demandan que las cuestiones de aplicación se resuelvan antes de iniciar una nueva ronda. Otros, como Chile, prefieren concentrar las sesiones sobre aplicación en asuntos que puedan arrojar resultados sin abrir a negociación los acuerdos existentes.

La segunda sesión especial está prevista para el 18 y 19 de octubre y la tercera para el 18 y 19 de diciembre. Es difícil predecir en qué consistirá finalmente la revisión de la aplicación de acuerdos. Aún no hay negociaciones y todo parece indicar que las formas de resolver estas cuestiones se discutirán informalmente entre Miembros y no en el Consejo General, cuyas discusiones parecen meras repeticiones de las discusiones previas a Seattle.

Propiedad Intelectual

Las diferencias entre países en desarrollo y desarrollados sobre el alcance de la revisión del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) continúan enredando el inicio de la misma, y así se reflejó en la última reunión del Consejo del ADPIC el pasado 26-30 de junio, en la que ni siquiera se pudo acordar cómo continuar con las discusiones.

Uno de los temas más controvertidos en esta área es la revisión del artículo 27.3(b) sobre exclusiones a la patentabilidad de organismos vivos. En general, los países en desarrollo buscan una revisión de esta disposición y obtener mayor flexibilidad para crear sistemas *sui generis* de protección de la propiedad intelectual sobre estos organismos, incluyendo la posibilidad de que se los excluya del régimen. Por su parte, los países desarrollados se oponen a revisar el Acuerdo, y

buscan una revisión procedimental, es decir, orientada a evaluar la aplicación de sus disposiciones.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de explorar la relación entre el ADPIC y la Convención sobre Diversidad Biológica, cuya Secretaría ha solicitado estatus de observador en el Consejo ADPIC junto con otras once organizaciones intergubernamentales. El único resultado concreto de la reunión parece haber sido la concesión del estatus de observador a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La próxima reunión del Consejo está prevista para el 21-22 de septiembre.

Novedades del Comité de Comercio y Medio Ambiente

Varias discusiones mantuvo el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) el pasado 5-6 de julio. El tema central fueron las relaciones entre las agendas de los acuerdos multilaterales ambientales (AMUMA) y la OMC. Para ello, los Miembros de la OMC se reunieron con cuatro Secretarías de AMUMA (las de las convenciones de Biodiversidad, Montreal, Cambio Climático y Conservación de Atún del Atlántico) y varias organizaciones internacionales hicieron presentaciones (PNUMA, FAO, UNCTAD y OMPI).

Además de las relaciones con AMUMA, el CCMA abordó temas como las exportaciones de productos prohibidos internamente, la protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional, la Convención sobre Diversidad Biológica y el ADPIC, el principio precautorio y los subsidios a la pesca y a la energía.

Relaciones OMC-AMUMA. Suiza presentó un documento en el que propone una decisión interpretativa para prevenir conflictos innecesarios entre la OMC y las medidas comerciales contenidas en los AMUMA, que generó un sonado debate. Varias delegaciones –incluyendo las de Canadá, la Comunidad Europea, Hungría, Islandia, Japón y Noruega– apoyaron la propuesta, en tanto que otras –principalmente las de Australia, Nueva Zelandia y EE.UU.– opinaron que los acuerdos de la OMC son lo suficientemente flexibles como para acomodar a los AMUMA.

Exportaciones de productos prohibidos internamente. Bangladesh realizó una presentación (WT/CTE/W/141) sobre productos prohibidos internamente. Según un funcionario de la OMC, todos los miembros apoyaron las recomendaciones de este país en el sentido de notificar las exportaciones de dichos productos en las áreas no cubiertas por otros instrumentos internacionales, y solicitaron a la Secretaría de la OMC que prepare un estudio sobre el tema que deberá estar listo para la próxima reunión del CCMA en octubre, a fin de que los miembros discutan qué acciones tomar.

Principio precautorio. Con poco apoyo de los demás Miembros, la UE hizo una presentación sobre el principio precau-

Continúa en la página 8

Continuación de la página 7

torio (WT/CTE/W/147; G/TBT/W/137) en la que propone que se aclare este principio en la OMC para así asegurar que no se lo utiliza arbitrariamente o como una forma de proteccionismo. Si bien varias delegaciones apoyaron el énfasis que hace la UE en que las decisiones tengan una base científica, varios miembros señalaron la inexistencia de una definición acordada del principio y advirtieron el peligro de que se invoque la precaución para justificar medidas proteccionistas.

Subsidios al sector pesquero. EE.UU., por su parte, presentó un documento (WT/CTE/W/154) llamando a reformar los subsidios en el sector pesquero que dañan el medio ambiente y distorsionan el comercio. En su documento, EE.UU. establece un marco de categorías para identificar los subsidios perversos en este sector. Argentina, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Islandia, Australia y Hong Kong-China, entre otros, apoyaron la propuesta de generar situaciones de mutuo beneficio para el ambiente y el comercio a través de la eliminación de los subsidios a la pesca. Japón, Corea y la UE argumentaron que las discusiones en el CCMA deberían esperar a los resultados de los trabajos en curso en APEC, FAO y la OCDE. Se mencionó la necesidad de realizar análisis fácticos comprehensivos de las transferencias gubernamentales al sector pesquero, y se solicitó un documento sobre el particular a la Secretaría para la reunión de octubre.

Veintidós de los 23 documentos de la Secretaría para el CCMA y otros documentos referidos en esta nota están disponibles en el sistema de disseminación de información de la OMC en <http://www.wto.org/wto/ddf/ep/public.html>

Durante la próxima reunión, prevista para los días 24 y 25 de octubre, se adoptará el informe al Consejo General sobre el trabajo de este año.

OMC en busca de transparencia

Las relaciones de la OMC con otros actores (transparencia externa) y los procedimientos internos de toma de decisiones en la organización (transparencia interna) han vuelto a causar debate.

Transparencia interna. En la reunión del Consejo General del 17 de julio, su Presidente, Kare Bryn, presentó un texto que describe de manera formal el proceso informal de toma de decisiones que utilizan los Miembros de la OMC. Esta presentación causó la preocupación en algunos países (como Pakistán, Egipto, India y Malasia) de que se estuviera formalizando un proceso sobre el que no hay acuerdo. El documento hace referencia a que "de manera complementaria, pero de ninguna manera en reemplazo de [un proceso abierto de consultas], las consultas pueden realizarse entre Miembros individualmente o en grupos de Miembros". Esta propuesta parece confirmar la práctica de sesiones cerradas en las que grupos de miembros se reúnen fuera de la estructura de la OMC

para forjar acuerdos que afectan a todos. Precisamente, este proceso excluyente fue uno de los factores del colapso de la reunión de Seattle.

Transparencia externa. Este tema fue discutido durante la sesión del 21 de julio. Varias organizaciones de la sociedad civil y algunos gobiernos (especialmente de países desarrollados) buscan abrir más la OMC al escrutinio público. Bryn, anunció que iniciará consultas sobre las propuestas presentadas por los miembros.

La propuesta de Bryn fue bien recibida por Canadá, EE.UU., Japón y la UE. Sin embargo, México, Cuba, Uruguay, India y Hong Kong-China se opusieron a que el tema entre en la agenda formal de discusiones, ya que hay cuestiones más importantes que discutir antes, como la transparencia interna. Todo parece indicar que el tema estará bastante quieto en la agenda de discusiones, hasta tanto no se lo incluya en una nueva ronda para ser utilizado como moneda de cambio.

Bryn presentó los resultados de las consultas sobre des-restricción de documentos. En síntesis, la opinión generalizada entre los Miembros continúa siendo que los procedimientos de circulación de documentos adoptados en Singapur en 1996 han funcionado suficientemente bien y que no se pueden hacer cambios significativos como proponen algunas delegaciones. Indicó, sin embargo, que hay espacio para mejoras, como por ejemplo haciendo públicas las minutas de las reuniones y los documentos base preparados por la Secretaría.

La traducción de los documentos en los tres idiomas oficiales de la OMC (español, inglés y francés) continúa impidiendo una rápida des-restricción, y muchos países en desarrollo son reticentes a permitir que se hagan públicas las decisiones de los paneles antes de que sean traducidas.

Gran Bretaña favorecerá compras de madera sustentable

El gobierno de Gran Bretaña anunció el pasado 27 de julio un cambio importante en su política de compras de madera, orientado a combatir la tala y el comercio ilegal de madera. Según un comunicado de *Greenpeace*, la nueva política hará que el gobierno apoye prácticas forestales sustentables buscando activamente comprar madera y productos maderables de fuentes legales y sustentables. Cada departamento del gobierno deberá presentar un informe anual describiendo las garantías que ha recibido de que la madera comprada proviene de fuentes legítimas y ambientalmente responsables. La política, según fuentes gubernamentales, incentivará la producción sustentable en países en desarrollo al asegurar a los productores responsables que no serán perjudicados por competidores que usan métodos ilegales e inescrupulosos. El cambio de política viene después de la Cumbre del G-8 en Okinawa, donde se acordó examinar cómo combatir la tala ilegal, incluyendo las prácticas de exportación y compras gubernamentales.

El caso atún–delfín podría volver a la OMC

El 6 de agosto pasado México solicitó ‘consultas políticas urgentes’ con Estados Unidos ante la posibilidad de que este incumpla con el compromiso de levantar el embargo al atún mexicano que debía terminar el pasado 12 de abril después de más de una década de vigencia. El Earth Island Institute y otras nueve organizaciones conservacionistas se siguen oponiendo y han presentado recursos ante las cortes estadounidenses.

Los demandantes consideran insuficiente el criterio dolphin safe acordado en el marco del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (PICD) por los países del Pacífico Tropical Este. Estos países, acordaron reducir la mortandad de delfines estableciendo la obligación de llevar a bordo un observador que certifique que durante el proceso de captura del atún no se mate o hiera seriamente a los delfines en lugar de prohibir las redes cerqueras. El Servicio Nacional de Pesca Marina decidió dar por terminado el embargo al considerar que México ha ejecutado satisfactoriamente este acuerdo.

Las mismas organizaciones también solicitaron el pasado mes de abril a la Corte de Comercio Internacional de EE.UU. (CCI) que emita una orden de restricción temporal sobre el levantamiento del embargo a la importación de atún mexicano con el argumento de que de no hacerlo se podrían en riesgo de extinción tres *stocks* de delfines. Esta moción fue negada el 18 de abril por la CCI que dijo no haber encontrado evidencia suficiente de que levantar el embargo al atún mexicano aumentaría la mortandad de los delfines hasta el punto de la extinción.

Por su parte México señala que sus esfuerzos para reducir la matanza de delfines en la pesca de atún han sido incluso reconocidos por Estados Unidos, país que, en cambio, no ha cumplido con los compromisos del PICD y, que la falta de acceso a los mercados está promoviendo la proliferación de métodos de pesca no sustentables y menoscabando los progresos hechos durante la década anterior.

Se espera que las dos partes se reúnan en septiembre en el marco del PICD, aunque México ha advertido que está dispuesto a llevar el caso a la OMC si las ‘consultas políticas’ no dan los frutos esperados. La otra opción sería retirarse del PICD, instancia en la que tiene aparentemente más opciones de prevalecer que en la OMC ya que no está en vigencia por el momento el embargo a las importaciones de atún mexicano y el etiquetado dolphin safe del gobierno no es obligatorio para la venta de productos derivados del atún en EE.UU.

Sin embargo el problema va más allá porque a pesar de que no exista un embargo formal, pocos importadores o cadenas de supermercados estadounidenses compran atún que no tenga el sello dolphin safe debido a la presión de los consu-

midores. Esta es la razón por la que México está presionando para que Estados Unidos se acoja al nuevo estándar que permite el uso de redes cerqueras de acuerdo al PICD. No obstante, esta será una batalla difícil de ganar para México, dado que el lobby de los grupos conservacionistas ha conseguido que algunos grandes distribuidores de atún se comprometan a mantener el anterior criterio de dolphin safe (es decir la prohibición de redes cerqueras) y nada podrá evitar que usen un etiquetado diferente y que utilicen, incluso, este argumento como incentivo de compra.

El PICD, que ha logrado importantes avances en la reducción de la mortandad de los delfines, ofrece un camino más expedito para ganar acceso a los mercados si es que los consumidores estadounidenses se convencen de que la cooperación internacional es la forma más efectiva para proteger los bienes comunes. Según datos del gobierno de EE.UU. la mortandad de delfines descendió de 15.550 a 3.716 durante el primer año de vigencia de un acuerdo internacional voluntario previo al PICD, aunque la plena vigencia del embargo de EE.UU. pudo haber incidido en ello. La CCI reconoció esto cuando se opuso a postergar el fin del embargo y señaló que este fue consecuencia de un régimen internacional que condujo a una notoria disminución y estabilización de la mortandad de delfines. Advirtió también que si el PICD fracasa, los delfines del Pacífico Este quedarán sin ninguna protección. Por otra parte la CCI citó el argumento del gobierno de EE.UU. en el sentido de que continuar el embargo afectaría la capacidad de ese país de conducir su política externa "particularmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de regímenes ambientales".

Importaciones de asbesto pueden prohibirse para proteger la salud

Francia puede mantener la prohibición de importar asbesto blanco de Canadá. Así se pronunció el panel solicitado por este último país para que examine si la prohibición es un obstáculo innecesario al comercio según el Art. 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

En su decisión, el panel argumenta que la prohibición no es un reglamento técnico y por lo tanto no cae dentro del ámbito del OTC. El panel también estableció que, si bien la prohibición francesa es incompatible con las disposiciones sobre trato nacional del Art. III del GATT, ese país podía aplicar la excepción del Art. XX (b), que permite la adopción de medidas "necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales". Este es el primer caso en el que un panel de la OMC admite medidas adoptadas en virtud de este artículo. Las excepciones del Artículo XX, en particular las del inciso (b) y (g) (medidas "relativas a la conservación de los recursos naturales agotables") son, hoy por hoy, las principales disposiciones sobre medio ambiente en el GATT y la decisión del panel refuerza su importancia.

Convención de Cambio Climático

Los Organos Subsidiarios de Asesoramiento Científico y Técnico y de Ejecución de la Convención de Cambio Climático realizaron su 12a. sesión en Bonn (Alemania) del 12 al 16 de junio. En esta reunión -a la que asistieron más de 1.700 delegados- se trataron los principios, modalidades, reglas y parámetros de los tres mecanismos establecidos en la Convención de Cambio Climático de Kyoto: aplicación conjunta, comercio de emisiones y mecanismo de desarrollo limpio, en relación con los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de Kyoto que se espera sean adoptados en la sexta conferencia de las partes (COP-6) que se llevará a cabo en La Haya en noviembre de este año. Se espera que en la COP-6 participen 10.000 delegados y que esta conferencia se convierta en un hito para la puesta en marcha efectiva del Protocolo.

Uno de los objetivos principales del encuentro de Bonn fue aproximarse a un texto final sobre los mecanismos de Kyoto que permita que las reducciones de emisiones acordadas en el Protocolo sean factibles. El manual de "reglas" para llevar estos mecanismos a la práctica fue discutido exhaustivamente pero aún falta mucho por añadir antes del final de la COP-6. Uno de los temas claves por resolver es la utilización de los mecanismos de Kyoto en detrimento de la aplicación de políticas domésticas y medidas locales.

Las implicaciones comerciales de los mecanismos de Kyoto y la aplicación de la mitigación doméstica no se discutieron abiertamente en la reunión de Bonn. Sin embargo, al parecer existe consenso en el sentido de que la Convención es un régimen único que tiene sus propios mecanismos de confianza garantizados en los artículos 14 y 19 del Protocolo y por lo tanto cualquier disputa que pueda surgir podrá ser resuelta a través de la aplicación del artículo 3.

Sin embargo, hay preocupación por los conflictos que pueden surgir con las reglas de la OMC cuando el Protocolo entre en vigencia. Tal vez esta preocupación esté relacionada con el establecimiento de un grupo de contacto de 'buenas prácticas' domésticas que está encargado de formular una metodología para prevenir conflictos innecesarios con las reglas del comercio.

Mientras que algunos de los países de la Unión Europea consideran que las Reducciones Certificadas de Emisiones no son ni una mercancía ni un servicio, otros consideran que es demasiado pronto para discutir las implicaciones comerciales del Protocolo. Varias partes creen que se debe apuntar hacia un Protocolo que vaya más allá de la retórica y que todas las partes deben concentrarse en encontrar estrategias eficaces de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Por su parte, los países en vías de desarrollo (no pertenecientes al Anexo 1) que no tienen metas específicas de reducción de gases, están preocupados de que pueda surgir discriminación hacia sus exportaciones, si se consideran por ejemplo, el uso por parte de los países del Anexo 1 de subsidios y medidas que pueden ser inconsistentes con los principios de la OMC. La UE parece estar a favor de que se limite la transfe-

rencia de las reducciones certificadas de emisiones. La 'sobreventa' es también una de sus preocupaciones, la cual podría resolverse a través del esquema de 'responsabilidad del comprador' propuesto por Suiza.

El texto de los mecanismos continúa abierto a la espera de que los delegados se pongan de acuerdo en el próximo encuentro de los Organos Subsidiarios, en Lyon (Francia) entre el 11 y el 15 de septiembre. La intención de Estados Unidos de cumplir en un 90% con su compromiso de reducción de emisiones a través de la compra de reducciones certificadas, es visto por muchos como algo que puede comprometer los objetivos globales de la regulación climática existente.

Algunos delegados creen que los tópicos relacionados con el tema de la comercialización de las reducciones no serán siquiera resueltos en noviembre durante la COP-6, pero consideran que en todo caso la reunión de Lyon permitirá avizorar los primeros signos claros sobre el tema.

Comisión Ballenera Internacional

En el 52o. encuentro de la Comisión Ballenera Internacional que se llevó a cabo en Adelaide (Australia) del 3 al 6 de julio, se adoptaron medidas importantes:

Revisión del esquema de administración. Si bien la Comisión respalda el Procedimiento Revisado de Administración para la captura comercial de ballenas, hizo notar que varios puntos -entre ellos las inspecciones y los sistemas de observación- deben ser completados antes de que la Comisión considere la posibilidad de levantar la prohibición de cazar ballenas. Este trabajo está en marcha. La Comisión presentó una resolución adoptada por consenso (con algunas reservas) para continuar con esta tarea que incluye un encuentro del Grupo de trabajo en Febrero de 2001.

Sin embargo, en una actitud que se considera desafiante, Japón envió una flota al pacífico Noroeste el 29 de julio pasado a cazar, bajo el argumento de "propósitos científicos", especies de ballenas protegidas por la legislación estadounidense. La administración Clinton ya anunció la posibilidad de imponer sanciones comerciales contra los productos de pesca japoneses si la caza continúa. Japón por su parte, anunció que obtendría una victoria en la OMC si EE.UU. tomaba medidas unilaterales.

En 1997, Irlanda puso sobre la mesa una propuesta que intentaba acortar distancias entre los países que apoyaban el reinicio de la caza comercial de ballenas y aquellos que se oponían a ella. Esta propuesta incluía puntos como: finalización y adopción del Procedimiento Revisado de Administración; designación de un santuario global para las ballenas; permiso para cazar a comunidades dedicadas por tradición a esta actividad; prohibición del comercio internacional de productos provenientes de ballenas y prohibición de las capturas para estudios científicos. Varios comisionados expresaron inte-

Continúa en la página 14

Se mueve el ajedrez de la integración

Durante los últimos meses se ha producido una intensa actividad en la integración regional: El relanzamiento del Mercosur, la entrada en vigencia del acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas entre la Comunidad Andina y Argentina, la visita del presidente mexicano Vicente Fox a la región y la Cumbre de Presidentes en Brasil, son señales de un renovado interés en fortalecer los vínculos comerciales antes de que concluyan las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas.

Mercosur va por lo social más aún no por lo ambiental

El relanzamiento del Mercosur presenta, aparte de lo comercial, una característica importante: fue acompañado de la suscripción de una Carta Social. Esta se suma al "compromiso democrático" de Ushuaia como un avance en la integración de variables no comerciales al proceso de integración. El medio ambiente continúa ausente, con un Protocolo Ambiental que, en general, se estima que no será aprobado y deberá ser negociado nuevamente. Sin embargo, el impulso que recibieron en la reunión de Brasil temas como la infraestructura de la integración y la urgencia de resolver problemas como las trabas de Brasil a la importación de transgénicos de la Argentina, van perfilando la importancia de integrar la dimensión ambiental.

Preferencias Arancelarias

A partir del primero de agosto entró en vigencia el Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas suscrito entre la Comunidad Andina y Argentina, como un segundo paso hacia la consolidación de un bloque regional suramericano. El primer paso fue la suscripción del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas con Brasil en agosto de 1999.

Ahora la CAN espera iniciar lo más pronto posible las negociaciones con Uruguay y Paraguay para completar la primera fase de las negociaciones con el Mercosur que se centra en la concesión de preferencias arancelarias fijas.

Se espera que el Acuerdo suscrito con Argentina duplique las exportaciones de la CAN en los próximos dos años (de 400 a 800 millones de dólares). Actualmente la región tiene un déficit con Argentina de casi 900 millones de dólares.

Una vez que concluya la fase de preferencias arancelarias fijas, se podría iniciar la negociación en bloque de la zona de libre comercio que incluirá los productos no considerados en la primera etapa. Esta segunda fase tendría que estar lista a finales del próximo año dado que a comienzos del 2002 debe entrar en funcionamiento la zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur.

Brasil, que a finales de agosto invitó a casa a todos los países suramericanos, ha insistido en la importancia de consolidar un bloque antes de que terminen las negociaciones del Área de Libre Comercio para las Américas, para así negociar desde una posición más fuerte con Estados Unidos.

La Cumbre de Brasil

El 'Comunicado de Brasilia' simboliza el momento político que atraviesa el proceso integrador. A lo largo de sus 62 puntos, los Presidentes de la región reiteran una y otra vez su "compromiso irrenunciable con la democracia, la paz y la integración" y su deseo de convertir las fronteras en "un eslabón de unión".

El desarrollo sostenible y el medio ambiente estuvieron prácticamente ausentes del encuentro. Se hacen solo tres menciones directas al tema, y el texto refleja tanto la desconfianza persistente que este despierta a la hora de hablar de relaciones comerciales, como el desconocimiento de su importancia. En varios párrafos se menciona el desarrollo económico y social sin extenderse hacia la sostenibilidad.

Mientras no se generen intereses económicos que muevan mercados e impulsen el interés político en torno a lo ambiental, la relación de este tema con el comercio seguirá siendo marginal.

Las menciones a la sostenibilidad aparecen en los párrafos preambulares ("América del Sur inicia el nuevo siglo fortalecida por (...) la protección del medio ambiente – aplicando el concepto de desarrollo sostenible"), y en la sección de infraestructura de la integración en la cual se hace referencia a la aplicación de criterios de "sustentabilidad social y ambiental" en los nuevos proyectos de infraestructura.

El comunicado dedica algunos párrafos a la cuestión de la participación, en las secciones sobre Democracia y Comercio. En la sección sobre Democracia se hace referencia a "promover la participación de las organizaciones civiles y su contribución en el debate de los temas de interés público"; y en la sección de Comercio, a la "constitución de un foro consultivo suramericano entre altos funcionarios y representantes civiles, con el propósito de identificar acciones conjuntas de los países de la región en los campos del comercio y las inversiones". Queda por clarificar si la participación se limitará a "empresarios y trabajadores" o si se ampliará a otros grupos, y si el modelo de foro replicará el problemático y poco funcional Comité de Representantes Gubernamentales que se formó en el contexto del ALCA.

Los Presidentes reunidos en Brasil dejaron clara la necesidad de fortalecer posiciones regionales frente a las negociaciones del ALCA y respaldaron el "regionalismo abierto" como una forma de reforzar "la posición de los países de América del Sur en negociaciones importantes (...) como las de un Área de Libre Comercio de las Américas". También señalaron que el ejercicio para la conformación del ALCA está basado en la "consolidación de procesos subregionales".

Continúa en la página 12

Continuación de la página 11

Entre los acuerdos de seguimiento, se destacan dos compromisos: el de Bolivia de auspiciar un primer diálogo político entre CAN, Mercosur y Chile; y el ofrecimiento de Uruguay de ser anfitrión de una reunión ministerial sobre infraestructura para la integración.

¿Y lo ambiental qué?

¿Qué refleja la débil aparición del desarrollo sustentable en una reunión como la de Brasilia? Que falta incorporar al escenario de la integración una política ambiental que deje atrás las posturas reactivas y que genere medidas concretas que apoyen la sustentabilidad del desarrollo económico y construya, desde la región, una visión que sirva para la integración en el ALCA y la OMC.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, junto con CEPAL, lanzaron a finales de julio una iniciativa para ello. En un encuentro realizado en Chile, funcionarios gubernamentales, empresarios, ambientalistas e investigadores de todos los países de América del Sur se reunieron para discutir la relación del tema ambiental con la integración comercial de la región. En el encuentro se reconoció que el tema ambiental no ha estado presente en las negociaciones de integración comercial, lo cual significa desconocer las oportunidades que este implica y los intereses ambientales estratégicos que tiene la región.

Mientras no se generen intereses económicos que muevan mercados e impulsen el interés político en torno a lo ambiental, la relación de este tema con el comercio seguirá siendo marginal, advirtieron los participantes. El crecimiento económico (y la liberalización comercial como estrategia de crecimiento) no es suficiente para lograr el desarrollo, por lo que las políticas de apertura deben ir acompañadas del análisis de sus efectos probables y un desarrollo paralelo de la institucionalidad ambiental.

Empresa de EE.UU. gana caso contra gobierno de México en el TLCAN

El pasado 30 de agosto el Centro Internacional para la resolución de disputas relacionadas con la inversión, convocado dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) decidió que México debe pagar US\$16.7 millones a la compañía estadounidense de tratamiento de desechos Metalclad Corporation, que había instaurado una demanda en su contra en 1997.

Se espera que esta decisión, la primera relacionada con el medio ambiente y la salud pública, tenga implicaciones para otras disputas pendientes dentro del controvertido Capítulo 11 del TLCAN que les permite a las compañías privadas demandar a los gobiernos si consideran que sus intereses han sido vulnerados.

Metalclad, una pequeña compañía del sur de California, había adquirido una planta para el tratamiento de desechos en Guadalcázar (Estado de San Luis de Potosí), y le fue negado

el permiso de operación por una regulación municipal "cuando estaba lista para iniciar su explotación comercial" - según la compañía-, a pesar de que había recibido aprobación por parte de las autoridades federales y nacionales.

Luego de haber concedido el permiso, el gobernador del Estado decidió declarar como parte de una reserva ecológica el lugar donde iba a operar Metalclad, con el argumento de que este se encuentra ubicado sobre un importante sistema de drenaje de aguas subterráneas que había sido seriamente contaminado por el propietario anterior. Por su parte, los pobladores locales, más que por los asuntos ambientales, levantaron su voz de alarma por los peligros potenciales que tendría para su salud la vecindad con una nueva planta de mayor capacidad, y advirtieron que los niveles de infecciones respiratorias, cáncer y defectos de nacimiento entre sus miembros eran más altas que el promedio nacional posiblemente debido a la contaminación causada por la quema y el tratamiento inadecuado de desechos tóxicos.

Los tres miembros del tribunal de TLCAN decidieron por unanimidad que se trató de una expropiación injustificada y que se incumplieron las garantías mínimas que requiere un inversionista de acuerdo a las leyes internacionales. La compañía, sin embargo, no quedó muy satisfecha con esta 'victoria', dado que había solicitado US\$90 millones en compensación por el valor total estimado de la inversión, y el Tribunal solo le concedió US\$16.7 millones equivalentes al costo actual de la inversión.

México, que había ganado ya dos casos interpuestos en su contra en aplicación del capítulo 11 del TLCAN dijo que solicitará la revisión o anulación de esta decisión en una corte canadiense dado que si bien el Capítulo 11 no permite entablar una apelación ante la misma instancia, el artículo 1135 del mismo tratado le da tres meses al perdedor de una disputa para solicitar su revisión o anulación ante una corte competente.

La solicitud de México se centrará en que Metalclad inició la construcción sin haber obtenido los permisos locales respectivos y que la decisión del panel viola los poderes de las autoridades locales según lo establece la Constitución de ese país. Si sus argumentos no son aceptados en esta segunda instancia, México deberá pagarle a Metalclad US\$16.7 millones en 45 días o asumir un interés del seis por ciento anual.

La decisión del Tribunal en este caso puede fortalecer los argumentos de otras disputas pendientes relacionadas con la salud pública, como la de el de S.D. Myers Inc., una compañía estadounidense de tratamiento de desechos que demandó en 1998 a Canadá al considerar que su veto a las exportaciones de PCB's impide su operación en ese país.

EE.UU. por su parte enfrenta una demanda de Methanex, compañía canadiense de metanol, por US\$ 970 millones. Methanex dice que sus intereses fueron afectados cuando el estado de California decidió el año pasado que prohibiría el MTBE, un aditivo para el petróleo a base de metanol clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. como un potencial cancerígeno humano.

Pobres resultados de la Cumbre Social

Diversas delegaciones se reunieron en Ginebra a finales de junio para revisar los progresos y obstáculos en la aplicación de las propuestas de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social que se llevó a cabo en Copenhagen en 1995. El año 2000 era la fecha señalada para alcanzar algunos de los objetivos de la Cumbre tales como: acceso universal a la educación básica y finalización de la misma para al menos el 80 por ciento de los niños en edad escolar; atención básica de salud para todos con drásticas reducciones en las tasas de mortalidad infantil y materna; reducción a la mitad de los niveles de malnutrición entre niños menores de cinco años; reducción del analfabetismo por lo menos a la mitad de los niveles de 1990 y eliminación de la diferencia entre sexos en cuanto a tasa de alfabetismo; y, agua potable y obras sanitarias para todos.

Otros objetivos incluían reducciones significativas en el desempleo y la erradicación de la pobreza absoluta fijadas por cada nación de acuerdo con sus posibilidades. Los países receptores y donantes se comprometieron a incrementar el gasto social, los últimos a través de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) y alivios en la carga de la deuda, además de mejores condiciones de intercambio comercial.

Ninguno de los objetivos se ha cumplido. Una propuesta de adoptar un sistema 20-20, en donde los países donantes se comprometían a entregar el 20 por ciento de la AOD para el desarrollo social y los países receptores gastarían 20 por ciento de su presupuesto en la misma área, no se concretó. La idea de un impuesto a las transacciones financieras internacionales propuesta por el economista James Tobin, Premio Nobel de Economía, no pasó de ser una idea. Y en la práctica, los países donantes se han alejado del objetivo de donar el 0,7% de su PIB como AOD.

Bajo el lema "la consecución del desarrollo social para todos en un mundo globalizado", esta última sesión en la que participaron centenares de organizaciones de la sociedad civil, intentó reforzar los compromisos de la Cumbre Social, con especial énfasis en las consecuencias negativas de globalización.

Los grupos de la sociedad civil fueron los más críticos respecto a las recomendaciones del reporte presentado por el Secretario General de la ONU, 'Un mundo mejor para todos'. Este reporte producido por la ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE se concentra en la aplicación de 7 objetivos de desarrollo expuestos en diversas conferencias mundiales en los 90 y si bien reconoce que el crecimiento económico experimentado desde mediados de la década pasada ha tenido muy poco o ningún impacto en las condiciones de vida de las personas que ganan menos de un dólar al día en Africa, afirma que la "globalización ofrece enormes oportunidades para los países en desarrollo" e invita a estos países a que reduzcan sus barreras arancelarias y para - arancelarias con el objetivo de generar credibilidad entre los tanto locales como internacionales.

Globalización y derechos humanos

Un estudio encargado por Naciones Unidas sobre "la globalización y su impacto sobre la plena vigencia de los derechos humanos" en el que se fustiga a la Organización Mundial del Comercio (OMC) por su "grosero manejo" del sistema multilateral de comercio, fue presentado en la 52a. sesión de la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos antes de ser llevado a la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos en marzo y abril del 2001.

El informe, escrito por dos especialistas, describe a la OMC como una "verdadera pesadilla" para muchos países del mundo, en especial para aquellos en vías de desarrollo y concluye que es necesaria una revisión "radical de todo el sistema de liberalización del comercio y un análisis crítico de los beneficios que tal sistema otorga tanto a países ricos y como pobres".

El 17 de agosto, la subcomisión de la ONU adoptó de manera unánime una resolución que cuestiona el impacto de los acuerdos de libre comercio sobre los derechos humanos de pueblos y comunidades, en todo el mundo, señalando en particular y señala que existe un conflicto entre el régimen de derechos de propiedad intelectual y los derechos humanos proclamados internacionalmente.

Por su parte, Miloon Kothari de la ONG internacional 'Comité por los Derechos Humanos en la Inversión y el Comercio' señaló que esta resolución es "histórica porque define la posición del programa pro-derechos humanos de la ONU frente al trabajo de la OMC... Esta decisión afirma la primacía de los derechos humanos y de las obligaciones ambientales sobre los motivos comerciales y de beneficio individual".

La discusión sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y los derechos humanos fue públicamente lanzada en 1998 por Peter Drahos¹ en un informe presentado ante el panel de discusión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El argumenta que aunque la aplicación de los Acuerdos ADPIC es muy reciente, "la evidencia nos hace sospechar si los argumentos que pretenden aumentar y globalizar los estándares de propiedad intelectual sirven a la aplicación de los derechos humanos".

Drahos se refiere en particular al impacto de los ADPIC sobre los mercados de alimentos y medicinas y plantea que hasta ahora el interés en el acceso universal a la salud no ha sido relacionado con la producción de drogas para la gente de los países en vías de desarrollo "por parte de un sistema de mercado que depende en gran medida de las patentes para invertir en la investigación de nuevas drogas" simplemente, "porque la investigación dirigida a la obtención de patentes está determinada por la capacidad de pago". Drahos añade además que la estandarización de los derechos de propiedad intelectual a nivel global conducirá inevitablemente a un alza en los precios de alimentos y medicinas.

¹ Doctor del Queen Mary Intellectual Property Research Institute de Londres

El caso data de 1996, cuando Francia prohibió la importación y el uso del asbesto blanco. En 1998 Canadá cuestionó la prohibición en la OMC y salió en defensa de su industria de asbesto radicada en Quebec, segunda productora mundial y la mayor exportadora de este producto. Canadá ha argumentado que la prohibición no tiene fundamentos científicos adecuados y que este asbesto es más seguro que cualquier producto alternativo si se toman las medidas adecuadas.

Uno de los aspectos más interesantes de este caso es el relativo al trato que se le puede dar a los "productos afines". El panel estableció que la prohibición francesa era incompatible con las disposiciones sobre trato nacional del Art. III.4 del GATT, ya que, según el panel, el asbesto blanco y otros productos alternativos son "productos afines" y deben recibir trato no discriminatorio entre ellos. Sin embargo, el panel estableció que el Art. XX puede aplicarse para hacer esta discriminación. Esta decisión es particularmente importante y debe compararse con la adoptada en el caso atún-delfín, que es la contraria: no puede aplicarse el Art. XX para discriminar entre "productos afines", aunque en ese caso el problema ambiental lo suscitaba el método de producción (de captura de atún) y no el producto mismo (como lo es en el caso del asbesto).

Francia, representada por la UE en el caso, argumenta que 2.000 personas mueren cada año en ese país por el asbesto y que las fibras alternativas son menos riesgosas. Los cinco expertos científicos consultados por el panel habrían coincidido con la UE en que el asbesto blanco es cancerígeno y peligroso para la salud.

Si bien el asbesto blanco ya está prohibido en nueve de los 15 miembros de la UE, y Francia representa sólo el 5% de las exportaciones canadienses, a Canadá le preocupa que otros países también adopten prohibiciones, en particular sus socios comerciales en América Latina y Asia.

Panel acepta presentaciones espontáneas

En el contexto de una disputa sobre medidas compensatorias que EE.UU. impuso sobre importaciones de acero de Gran Bretaña, el Órgano Permanente de Apelaciones volvió a afirmar su derecho de aceptar presentaciones espontáneas de terceros. La primera decisión ocurrió en el caso camarón-tortugas, en el cual organizaciones ambientalistas presentaron algunos documentos a consideración del Órgano. Esta instancia explicó que si bien los individuos y las organizaciones que no hacen parte de la OMC no tienen derecho a ser escuchadas por el Órgano, el Entendimiento sobre Solución de Diferencias le permite considerar estas presentaciones (o amicus briefs) cuando lo considere pertinente y útil. No obstante en el caso del acero el Órgano decidió no considerar las presentaciones de entidades vinculadas con la industria de EE.UU.

Esta decisión confirma una importante ventana de acceso para las organizaciones no gubernamentales a los procesos de la OMC, y confirma también algunos temores de los críticos: la puerta está abierta para que todo tipo de entidades vinculadas a los sectores productivos u otros intereses (como el ambientalismo) impulsen sus agendas particulares a nivel de la OMC sin intermediación de los Estados.

AMUMA / Continuación de la página 10

rés en continuar las discusiones y la Comisión aceptó mantener esta propuesta en su agenda.

Estatus de las ballenas. A pesar de un largo período de protección, varias poblaciones de ballenas continúan en peligro (menos de 500 ejemplares). Algunas de las poblaciones de narvales del Ártico han sido capturadas por fuera de las regulaciones de la Comisión Ballenera Internacional, son matadas por los barcos o atrapadas en las redes de los pesqueros. El Comité Científico considerará su estatus como prioritario para el próximo año. La Comisión presentó una resolución aprobada por mayoría en la que solicita al gobierno de Canadá que no autorice más capturas.

Permisos científicos para capturas. Dos permisos solicitados por Japón fueron estudiados. El uno es la extensión de su programa en el Hemisferio Sur. El segundo es un estudio de dos años para "la conservación y el uso sustentable de recursos marinos vivos". El programa propone la captura de 160 ballenas de diferentes especies en el Pacífico Noroeste. La expedición de tales permisos es un derecho soberano de acuerdo con la Convención. La Comisión adoptó por mayoría varias resoluciones que piden al gobierno del Japón abstenerse de emitir tales permisos y reiteró que es necesario revisarlos para determinar la posibilidad de estudiar a las ballenas sin recurrir a su captura.

Investigación ambiental. En años recientes, la Comisión ha fortalecido su capacidad investigativa sobre los cambios en el medio ambiente y sus efectos sobre los cetáceos. El año pasado asignó 126.000 libras esterlinas a dos proyectos sobre contaminantes químicos y hábitat de las ballenas, que fueron desarrollados por su Comité Científico y otras instituciones. Sin embargo, le urge financiamiento adicional.

Pequeños cetáceos. A pesar de que aún los países miembros no se ponen de acuerdo sobre la competencia de la Comisión para tratar temas relacionados con cetáceos pequeños, el Comité Científico continúa estudiándolos. El tema de este año es el estatus de los delfines de agua dulce.

Cooperación con otros organismos. Se resaltó la importancia de la cooperación entre la Comisión y otras organizaciones - particularmente en el área de investigación científica- tales como la Convención de Especies Migratorias; el Consejo Internacional para la Exploración del Mar; y, la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos del Antártico.

El próximo encuentro se llevará a cabo en Londres en julio de 2001. El encuentro del 2002 se celebrará en Shiminoseki, Japón.

Revisiones al ICTSD y cambios en su estructura de gobierno

Los cuatro años transcurridos desde la creación del Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD), han traído grandes cambios en la forma como se relaciona el sistema multilateral de comercio con los intereses de la sociedad civil, con los países en vías de desarrollo y de una manera más amplia, con el desarrollo sostenible.

El nivel de compromiso y conocimiento que han adquirido las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil ha aumentado dramáticamente en este lapso. El ICTSD ha jugado un papel clave en posibilitar estos avances, como lo demuestra su expansión de un pequeño grupo de colaboradores a una red de más de 7.000 individuos y organizaciones en 200 países.

Reconociendo estas transformaciones, la Asamblea General del ICTSD decidió hacer una revisión del papel que cumple el centro dentro del cambiante contexto del comercio y el desarrollo sostenible. Esta revisión incluyó consultas con personas independientes a la organización y un estudio de marketing para conocer las prioridades del público del centro y así determinar cómo este les puede servir mejor. La lista de las personas consultadas y los reportes podrán encontrarse dentro de poco tiempo en www.ictsd.org

Hacia el fortalecimiento de la legitimidad

Dos cambios fundamentales se harán en la estructura de gobierno del ICTSD como resultado de las decisiones tomadas por la Asamblea General del 5 de mayo pasado: primero, los roles de la Junta Consultora del Programa (PAB) y del Consejo Consultivo de Comercio (TAC) serán asumidos por un nuevo *Stakeholder Forum*, un foro de actores conformado por 30 organizaciones asociadas al centro.

Segundo, la Asamblea General del ICTSD se ampliará de las cinco organizaciones fundadoras (CUTS, FFLA, IISD, SCDO y UICN) a trece personas que serán elegidas y prestarán sus servicios a título personal. La elección estará a cargo del Directorio actual que votará por los candidatos sometidos a su consideración en una lista de nominados en cuya elaboración participaron miembros de la PAB y el TAC.

El propósito de que la votación sea hecha por ambos organismos es asegurar un balance apropiado en cuanto a procedencia, género, representación de intereses, y asegurar que predominen en su orientación los intereses de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo. Estos cambios permitirán que ambas juntas asuman una actitud más activa y más comprometida con la misión y actividades del centro y harán que este tenga una más amplia representatividad.

Agradecemos sus comentarios y contribuciones sobre nuestra estructura y proceso de gobierno.

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN

buscan proveer información y análisis sobre la intersección entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y sus organizaciones asociadas reconocen el auspicio del Gobierno Federal Suizo (BAWI) para la publicación de Bridges y el de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur para Puentes y Passerelles.

BRIDGES Between Trade and Sustainable Development es publicado mensualmente por el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Director: Ricardo Meléndez-Ortiz

Editora: Anja Halle

Editora asociada: Caroline Dommen

Dirección: 13 chemin des Anémones 1219 Ginebra, Suiza

Tel: (41-22) 917-8492

Fax: (41-22) 917-8093

E-mail: ictsd@ictsd.ch

Web: <http://www.ictsd.org>

PUENTES Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible, la versión para América Latina de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con la Fundación Futuro Latinoamericano.

Coordinador: Nicolás J. Lucas

Editora: Manuela Botero Thiriez

Asesora editorial: María Amparo Albán

Asistentes editoriales: Oscar Haro y

Marijke Hallo de Wolf

Dirección: Casilla 17-17-558 Quito, Ecuador

Telefax: (593-2) 920-635/920-636

E-mail: ffla@interactive.net.ec

Web: <http://www.fulano.org>

PASSERELLES entre le commerce et le développement durable es la versión en francés de *BRIDGES*, publicada bimestralmente en colaboración con ENDA-Tiers Monde.

Coordinador: Taoufik Ben Abdallah

Dirección: B.P. 3370,

Dakar, Senegal

Tel: (221) 821-7037

Fax: (221) 822-2695

E-mail: syspro2@enda.sn

Web: <http://www.enda.sn>

BRÜCKEN Zwischen Handel und Zukunftsfähiger Entwicklung la versión alemana de *BRIDGES*, es publicada bimestralmente en colaboración con Germanwatch en Bonn, Alemania.

Coordinador: Rainer Engels

Tel: (49-228) 60492-0

Fax: (49-228) 60492-19

E-mail: tradewatch@germanwatch.org

Web: <http://www.germanwatch.org>



Las opiniones expresadas en los artículos firmados en *BRIDGES/PUENTES/PASSERELLES/BRÜCKEN* son exclusivas de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del ICTSD y las publicaciones. El material de estas publicaciones puede ser utilizado en otras publicaciones con una completa cita de su fuente.

Bridges Weekly Trade News Digest

Para suscribirse al resumen semanal en inglés del ICTSD de noticias comerciales relevantes para los interesados en Medio Ambiente y Desarrollo, por favor enviar un mensaje a: Majordomo@igc.apc.org. Dejar "subject" en blanco y en el cuerpo del mensaje escribir: subscribe tradedev. Para copias vía fax y correo, también contactar al ICTSD. También disponible en el sitio electrónico del ICTSD.

Todas las reuniones de la Organización Mundial del Comercio se celebran en Ginebra. Las fechas están sujetas a cambios; rogamos ponerse en contacto con la OMC para confirmarlas. Todos los números de teléfono y fax empiezan con (41-22) 739. Los números indicados en la lista que está a continuación corresponden únicamente a las extensiones. Dirección en internet: www.wto.org

EVENTOS

- Septiembre 11-15 13a. Sesión de los Organos Subsidiarios del Convenio Marco sobre los Cambios Climáticos de las Naciones Unidas. Lyon, Francia.
Contacto: Secretariado UNFCCC, tel: (49-228) 815-1000, fax: 815-1999,
e-mail: secretariat@unfccc.de
- Septiembre 18-21 26a. Período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO. Roma, Italia.
Contacto: Barbara.Huddleston@fao.org
- Septiembre 21-22 Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5458
- Septiembre 22 Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC.
Contacto: Chiedu Osakwe, tel: 5250, fax: 5774
- Septiembre 22-23 Conferencia Internacional sobre la Biotecnología en la Economía Global: La ciencia y el principio Precautorio. Cambridge, Estados Unidos.
Contacto: Derya Honca, Harvard University, e-mail: Derya_Honca@KSG.harvard.edu
- Septiembre 26 Reunión del Organo de Solución de Diferencias de la OMC.
Contacto: Gabrielle Marceau, tel: 5519, fax: 5788
- Septiembre 27 Comité de Agricultura de la OMC.
Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5458
- Septiembre 28-29 Sesión especial del Comité de Agricultura de la OMC (negociaciones).
Contacto: Peter Ungphakorn, tel: 5412, fax: 5458
- Octubre 5-6 Sesión especial del Consejo del Comercio de Servicios de la OMC (negociaciones).
Contacto: Nuch Nazeer, tel: 5393 fax: 5458
- Octubre 2-6 Consulta técnica de la FAO sobre pesca ilegal, no reportada y sin regulaciones. Roma, Italia.
Contacto: D. Doulman, (39-0) 675-051, e-mail: FI-Inquiries@fao.org
- Octubre 9-20 47a. Período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. Ginebra, Suiza.
Contacto: Oficina del Secretariado de la Junta. tel: (41-22) 907-5007, fax: 907-0056
- Octubre 9-11 Organo de Supervisión de los Textiles de la OMC (OST).
Contacto: J.-P. Lapalme, tel: 5223, fax: 5765
- Octubre 10 Consejo General de la OMC.
Contacto: Bernard Kuiten, tel: 739-5676, fax: 5777

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS

CORREA, Carlos María. 1999. "Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPs Agreement and Policy Options". Zed Books, Nueva York.

OMC. 2000. "Brazil - Export Financing Programme for Aircraft". Decision by the Arbitrators (on injury suffered by Canada due to PROEX financing WT/DS46/ARB). OMC. Ginebra.

BALDWIN, Richard. 2000. "Regulatory Protectionism, Developing Nations and a Two-tier World Trade System". Banco Mundial, Washington, D.C.

BASS, Susan and RUIZ MULLER, Manuel (eds.). 1999. "Protecting Biodiversity: National Laws Regulating Access to Genetic Resources in the Americas". IDRC, Ottawa.

CLAUDE, Marcel and OPORTO, Jorge (eds). 2000. "La Ineficiencia de la Salmonicultura en Chile". Terram Publicaciones. Santiago.

ROBINS, Nick and ROBERTS, Sarah. 2000. "The Reality of Sustainable Trade ". Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, Londres.

UNITED NATIONS/ILO. 2000. "Librería Digital de la Cumbre Social". Este CD-ROM contiene todos los documentos de la Cumbre Social celebrada en 1995 en Copenhagen y el evento de seguimiento realizado en Ginebra en junio del 2000. Naciones Unidas/ILO, Nueva York/Ginebra.

OMC. 2000. "Canadá -Patent Protection of Pharmaceutical Products". Arbitration of 'reasonable period' for implementation. (WT/DS114/13). OMC, Ginebra.

OMC.2000. "United States R Anti-dumping Act of 1916". Report of the Appellate Body. (WT/D136/ARB.R). OMC. Ginebra.

RECURSOS EN INTERNET

Cosbey, Aaron. 2000. "A Forced Evolution: The Codex Alimentarius Commission and Scientific Uncertainty". Borrador del artículo para comentarios. Contacto: acosbey@iisd.ca

Gelbspan, Ross. 2000. "The Climate Crisis and Carbon Trading". Foreign Policy in Focus. Washington. Disponible en <http://www.foreingpolicy-infocus.org/briefs/vol5/v5n20climate.htm>

OMPI. 2000. "Draft Report on Traditional Knowledge". Disponible para hacer comentarios en <http://www.wipo.int/traditionalknowledge/report>

OMC. 2000. "Agriculture: Work in the WTO. The Current Negotiations". Nueva sección del web site de la OMC. http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm

OMC. 2000. "Trade and Environment Material on the WTO Site". Incluye una completa recopilación de los boletines de Comercio y Medio Ambiente preparados por el Secretariado de las reuniones de la CTE. http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm

